REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, doce (12) de abril dos mil veintiuno (2021).

PROCESO: ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
ACCIONADA: JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL
DE MANIZALES
VINCULADO: RAÚL OCAMPO HENAO
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
RADICADO: 17001-31-03-006-2021-00074-00
SENTENCIA No. 36

Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro de la acción constitucional de la referencia, cuyo objeto de estudio corresponde a la solicitud de salvaguarda del derecho fundamental al “*debido proceso*”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

El señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ solicita se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y en consecuencia, se declare la nulidad de las actuaciones adelantadas por el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 17001400300120160073500, “desde el inicio de la demanda”.

Como fundamento de las pretensiones, expuso el señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ que ante el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES se tramitó proceso de restitución de bien inmueble arrendado radicado bajo el número 17001400300120160073500, en el cual fungió como demandado, y que se decidió a través de sentencia en la que se ordenó la entrega del bien inmueble al demandante señor RAÚL OCAMPO HENAO.

Expuso que en el mes de marzo del año 2019 fue demandado nuevamente por el señor RAÚL OCAMPO HENAO, según consulta de procesos efectuada, demanda que fue radicada bajo el número 17001400300120160073500 y dentro de la cual se libró mandamiento de pago el día 20 del marzo del año 2019, sin embargo, nunca fue notificado dentro de dicho trámite, y únicamente se enteró de las actuaciones por cuanto se fijó fecha para rematar el usufructo que estaba embargado.

1.2. Mediante providencia del 19 de marzo de 2021, se admitió la acción de tutela, se decretó la medida provisional solicitada, se dispuso la vinculación del señor RAÚL OCAMPO HENAO, se ordenó la notificación de los intervinientes y se les concedió el término de dos (2) días para pronunciarse sobre los hechos.

Por auto adiado en diciembre 2 de 2020 se ordenó la vinculación del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES.

1.3. Intervenciones

EL JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, dio respuesta a la acción de tutela en escrito por el cual efectúa una relación de las decisiones adoptadas dentro del proceso EJECUTIVO promovido por el señor RAÚL OCAMPO HENAO contra el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ radicado bajo el número 17001400300120160073500.

Adujo que las actuaciones adelantadas por ese Juzgado, versan sobre el anterior proceso ejecutivo seguido a continuación de proceso de restitución, conforme al mandamiento ejecutivo de fecha abril 8 de 2019, decisión que no fue controvertida por el demandado y en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución. Asimismo, reunidos los presupuestos para ello, mediante auto del 24 de febrero del año en curso se fijó fecha y hora de remate del usufructo del bien inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria No. 100-131312, para el día 23 de marzo de 2021, diligencia que fue suspendida según medida provisional adoptada dentro de la presente acción de tutela.

Indicó que al accionante no se le han vulnerado derechos fundamentales, y aunado a ello, no se verifica dentro del respectivo proceso el uso de los medios ordinarios para controvertir las decisiones adoptadas, las cuales han sido notificadas en debida forma

El señor RAÚL OCAMPO HENAO a través de apoderado dio respuesta a la acción de tutela, e indicó que al señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ no se le vulneró el derecho al debido proceso, ni el de defensa, ni al acceso a la administración de justicia, y no resulta procedente que pretenda que a través de la acción de tutela se impartan ordenamientos en su favor cuando no cumplió con las cargas procesales en el respectivo proceso.

Expuso que mediante sentencia de tutela del 7 de septiembre de 2018, el Tribunal Superior de Manizales dejó claro el vínculo contractual del accionante con el señor RAÚL OCAMPO HENAO, aquel como arrendatario y este como arrendador en el contrato respecto del cual versó un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, que culminó con sentencia favorable al demandante aditada en febrero 12 de 2019.

Indicó que el día 5 de marzo de 2019 se presentó solicitud de ejecución conforme lo dispone el artículo 306 CGP, esto es, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, y mediante auto del día 20 del mismo mes y año el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales libró mandamiento de pago contra el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y en favor del señor RAÚL OCAMPO HENAO, providencia que fue notificada por ESTADO según mismo regla la norma ibídem, aunado al hecho que en aquella data no se había expedido el Decreto 806 pues ello acaeció en el año 2020, y el mismo no tiene efectos retroactivos.

Solicita se nieguen las pretensiones de la tutela.

EL JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES dio respuesta a la acción de tutela, e indicó que en ese Despacho judicial se tramitó proceso de restitución de bien inmueble arrendado promovido por el señor RAÚL OCAMPO HENAO contra el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y otro, el cual fue admitido el día 29 de noviembre de 2016, el cual fue notificado a éste el día 18 de agosto de 2017 de manera personal, diligencia en la cual se notificó igualmente las medidas cautelares practicadas en su contra, es decir, el embargo del usufructo sobre el bien inmueble con folio No. 100-131312, así como su secuestro y de la respectiva diligencia adelantada por ser quien atendió al Despacho en su práctica. Que dentro del trámite anterior se profirió sentencia el día 12 de febrero de 2019, en la cual se declaró terminado el contrato de arrendamiento en el que funge como cesionario el accionante.

Indicó que a continuación del anterior proceso, y dentro del término de 30 días previsto en el artículo 306 CGP, el día 6 de marzo de 2019 se adelantó proceso ejecutivo a continuación, dentro del cual se libró mandamiento de pago contra el señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ el día 20 de marzo de 2019, mismo que fue notificado por estado al demandado según dispone la norma citada.

Refiere que las providencias fueron proferidas fueron notificadas en debida forma, y frente a las mismas el aquí accionante no interpuso ninguna clase de recursos en su momento y quedaron debidamente ejecutoriadas al interior de un proceso donde pudo ejercer su derecho de defensa.

Por lo anterior, solicita se nieguen las pretensiones.

Por las razones esbozadas, solicita se nieguen las pretensiones.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Debate jurídico:

De acuerdo a la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho determinar si el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES vulneró los derechos fundamentales JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ dentro del proceso EJECUTIVO que contra éste adelantó el señor RAÚL OCAMPO HENAO, radicado bajo el número 17001400300120160073500; concretamente, si dentro del mismo se efectuó en debida forma la notificación del accionante.

Lo anterior, previo el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

2.2.1. Legitimación por activa.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el derecho que tiene toda persona para reclamar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales cuando los mismos resulten amenazados o vulnerados, a

través del ejercicio de la acción de tutela. Acorde con lo precedente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que puede acudir a la acción constitucional mencionada, toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o por representante, o mediante agente oficioso si el titular de las garantías amenazados o transgredidos no está en condiciones de promover su propia defensa.

De esta manera, la tutela es interpuesta por el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y acude a la vía constitucional en su propio nombre, por lo que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa.

2.2.2. Legitimación por pasiva.

La acción de tutela se dirige contra la autoridad judicial que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, esto es el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, y en ese sentido se considera evidente la legitimación en la causa por pasiva.

2.2.3. Inmediatez

En cuanto al requisito precitado, si bien de conformidad con el artículo 86 Superior la acción de tutela puede interponerse en todo momento y lugar, ha dispuesto la Corte Constitucional que la misma debe promoverse en un término razonable, pues de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad jurídica y se desnaturalizaría la acción¹.

En el presente asunto, el actuar supuestamente trasgresor de los derechos fundamentales se dio con las actuaciones adelantadas por el Despacho accionado dentro del proceso ejecutivo en el cual fungió como demandado, y según se afirma en el libelo se enteró de la existencia de dicho trámite con ocasión al señalamiento de fecha y hora para efectuar el remate de un derecho de usufructo, lo cual se dispuso mediante providencia del 24 de febrero de la presente anualidad. De esta manera se satisface igualmente la exigencia.

2.2.4. Subsidiariedad - Acción de tutela contra providencias judiciales

Mediante Sentencia SU 116 de 2018², la Corte Constitucional recapituló los requisitos generales y especiales para la procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales, en los siguientes términos:

“Esta nueva dimensión abandonó la expresión “vía de hecho” e introdujo “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, los cuales fueron distinguidos como de carácter general y de carácter específico. Los primeros constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo y fueron clasificados así:

¹ Sentencia T 260 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo

² Corte Constitucional, Sentencia SU 116-2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas

"24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente **relevancia constitucional**. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan **agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada**, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la **inmediatez**, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. **Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora**. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora **identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados** y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. **Que no se trate de sentencias de tutela**. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas". (Resaltado fuera de texto).

Los segundos -requisitos específicos-, aluden a los yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela. Esos fueron denominados "causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales", y se explicaron en los siguientes términos:

"a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución”.

2.3. Caso concreto

En el presente asunto se encuentran demostrados del cartulario, los siguientes hechos relevantes:

- En el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES se tramita la ejecución de la sentencia proferida dentro del proceso EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA promovido por el señor RAÚL OCAMPO HENAO contra el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, el cual cuenta con el radicado No. 17001400300120160073500

- Del expediente que corresponde al trámite ejecutivo dentro del cual se adoptaron las decisiones presuntamente trasgresoras de los derechos fundamentales del accionante, se evidencian las siguientes relevantes:

Actuación	Fecha	Despacho
Radicación solicitud de ejecución	5 de marzo de 2019	Ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales
Auto libra mandamiento ejecutivo	20 de marzo de 2019	Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales
Auto ordena seguir adelante la ejecución	08 de abril de 2019	Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales
Presentación liquidación del Crédito	24 de abril de 2019	Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales
Auto avoca conocimiento y ordena correr traslado liq. crédito	7 de mayo de 2019	Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Mzales.
Traslado mediante fijación en lista de liq. crédito	8 de mayo de 2019	Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Mzales.
Auto aprueba liquidación del crédito	16 de mayo de 2019	Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal de Mzales.

De esta manera, se evidencia que mediante providencia adiada en marzo 20 de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales libró mandamiento de pago contra el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y en favor del señor RAÚL OCAMPO HENAO, según solicitud de ejecución a continuación de proceso de restitución de bien inmueble arrendado -que se decidió con sentencia favorable a la parte demandante adiada en febrero 12 de 2019- por sumas de dinero por concepto de cánones de arrendamiento. En el ordinal quinto de la parte resolutive se dispuso su notificación por ESTADO al demandado, con fundamento en lo previsto en el artículo 306 CGP, esto es, por haberse solicitado la ejecución el día 5 de marzo de 2021, dentro de los 30 días siguientes a la data de la sentencia. Con todo, se duele el demandante de la falta de notificación de las providencias proferidas dentro del trámite de ejecución, incluida la providencia por la cual se libró orden compulsiva de pago.

Expuestos los anteriores supuestos fácticos, resulta oportuno extraer de la jurisprudencia transcrita párrafos atrás, que las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos, a saber: Las llamadas 'generales' o 'requisitos de procedibilidad', mediante las cuales se determina si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. De otro lado se encuentran las causales denominadas 'especiales' o 'específicas', a través de las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, trasgredió o no derechos fundamentales.

Así, al efectuar el análisis del primera grupo de requisitos, considera este funcionario que el asunto puesto en consideración tiene relevancia constitucional en el entendido que lo alegado por el accionante es la vulneración al debido proceso, el cual se encuentra contenido en el artículo 29 de la Constitución Política; en cuanto a la exigencia de haberse agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; se encuentra lo siguiente: El señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ expuso en el escrito de tutela que dentro del proceso ejecutivo atrás referido se han proferido 50 actuaciones, ninguna de las cuales le ha sido notificada en debida forma, y que únicamente se enteró del trámite en su contra por cuanto se fijó fecha para adelantar la diligencia de remate del usufructo embargado, esto es, el del bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 100-131312.

Nótese que el señor SÁNCHEZ SÁNCHEZ aduce precisamente no haberse enterado del contenido de ninguna de las decisiones adoptadas, a partir del auto que libró orden de pago, inclusive, en tanto nunca fue notificado de la manera en que se procedió en el trámite declarativo que le antecedió al juicio ejecutivo, o de la manera dispuesta en el Decreto 806 de 2020. No obstante lo anterior, según se desprende del expediente, el accionante no ha solicitado la nulidad del trámite pese a que la situación expuesta ante este Juez constitucional se encuentra entre las causales taxativamente previstas en el artículo 133 CGP para pedir que se deje sin efecto las actuaciones enjuiciadas.

De cara a las razones esbozadas, se colige que en el presente asunto no se supera la exigencia jurisprudencial establecida para abrirle paso al análisis de fondo del asunto, a saber, la utilización de los mecanismos judiciales ordinarios dispuestos para

la resolución de las controversias, y no se mencionó ni se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable que conlleve al estudio del amparo deprecado pese a la omisión encontrada.

Cabe resaltar que la acción de tutela no es una instancia adicional o alternativa o paralela a los medios judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico para zanjar cada controversia, y de hacerlo, irrumpiría en asuntos que deben ventilarse por otras autoridades judiciales en el escenario propio de cada proceso, que de ninguna manera se acompasa con la esencia y fundamento de la acción de tutela.

Por las razones esbozadas, se declarará la improcedencia de la tutela invocada, y en consecuencia se ordenará el levantamiento de la medida provisional adoptada en el auto de admisión de la tutela.

DESVINCULACIONES

Se dispondrá la desvinculación del presente trámite del JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES y del señor RAÚL OCAMPO HENAO, por cuanto no se demostró conductas activas u omisivas vulneradoras de los derechos fundamentales del accionante.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada por el señor JESÚS FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ contra el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, por las razones esbozadas en las consideraciones.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite al JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES y del señor RAÚL OCAMPO HENAO. Lo anterior, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: LEVANTAR LA MEDIDA PROVISIONAL decretada en la providencia por la cual se admitió la tutela, y que consistía en *la suspensión de la diligencia de venta en pública subasta de los derechos de usufructo sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 100-131312, la cual se encuentra programada para el día 23 de marzo de 2021 a la hora de las diez de la mañana (10:00 a.m).*

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO MANIZALES**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

1ed1b3f55b2f43f3f58b6d74d3bb7d0dfb7595a5e81a9bcb0489daf095e8a6af

Documento generado en 12/04/2021 11:28:03 AM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**